

LA CAPACIDAD REAL DE AUTODETERMINACIÓN ECONÓMICA DEL GOBIERNO BOLIVIANO: UN ANÁLISIS DEL PROCESO DE NACIONALIZACIÓN EN EL CASO DEL GOBIERNO DEL *MOVIMIENTO AL SOCIALISMO* (MAS) 2006 - 2009.

Lucas Sánchez Martínez.

INTRODUCCIÓN.

El 22 de enero de 2006 el líder sindical cocalero Juan Evo Morales Ayma asumió la presidencia de la República de Bolivia tras haber salido victorioso en los comicios presidenciales que habían tenido lugar en dicho país el 18 de diciembre del año inmediatamente anterior, convirtiéndose así en el primer presidente indígena de la historia boliviana. Con la histórica obtención por parte de Morales de la mayoría absoluta de los votos (53,7%), el triunfo del candidato presidencial por el Movimiento Al Socialismo (MAS) representó la llegada al poder del movimiento indígena-popular boliviano tras casi dos décadas de luchas y confrontaciones sociales que desde principios del presente siglo venían profundizándose (Cuba, 2006), (Stefanoni, 2006).

Este movimiento, articulado en clara oposición a las políticas antinarcóticos de los EE.UU. y a la ‘agenda económica neoliberal’ implementada en Bolivia de manera formal desde mediados de la denominada *década perdida* y fomentada primordialmente por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) tras la crisis de la deuda desatada en Latinoamérica en 1982 (International Crisis Group, 2004), lograría con la victoria electoral del MAS llegar al gobierno central a través de su principal instrumento político después de varios años de intensas luchas institucionales y extrainstitucionales.

La postura reflejada durante la época de campaña electoral por el entonces candidato presidencial poseía un carácter abiertamente estatista, haciendo énfasis, tal como lo destacaba Santos en 2006, en la promoción de una mayor intervención y regulación por parte del Estado boliviano en distintos ámbitos de la economía y política nacional. El grueso del discurso electoral del hoy mandatario de Bolivia, discurso que se ha mantenido bastante vigente a lo largo de lo que va del periodo presidencial del dirigente, se ha caracterizado especialmente por articularse alrededor de una crítica directa a los principales postulados del neoliberalismo, dentro de los cuales se destaca en materia de política económica la privatización. Álvaro García Linera, vicepresidente actual de Bolivia y considerado públicamente uno de los

principales ideólogos a la cabeza del proyecto político *masista*, es claro al respecto: “Lo interesante [...] es ver cómo a partir de los jirones del indianismo, lo nacional-popular, el sindicalismo y el marxismo, Evo Morales ha podido convertir al MAS en una maquinaria de poder que [...] llegó a controlar el Estado para, desde ahí, atreverse a emprender la construcción de un *modelo postneoliberal* [...]” (2006, p. 30), (énfasis añadido).

Es importante tener en cuenta que durante el proceso de implementación e instrumentación paulatina del conjunto de medidas neoliberales en la República boliviana, al igual que en la mayoría de países latinoamericanos, las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), primordialmente el FMI y el BM, desempeñaron un papel protagónico.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Considerando entonces que el proyecto político *masista* pretende construirse en abierta contraposición a los lineamientos privatizadores propios del modelo neoliberal que venía siendo implementado en Bolivia desde mediados de los ochenta a partir de la acción conjunta del FMI, el BM y determinados sectores nacionales, el problema alrededor del cual giró la investigación que en esta ponencia se resume es el siguiente: *¿cuáles han sido los principales elementos facilitadores y obstaculizadores, tanto a nivel internacional como regional y nacional, dentro del proceso estatista y nacionalizador que ha venido implementando en materia de política económica el gobierno boliviano del MAS desde su llegada al poder en enero de 2006 y hasta marzo de 2009?*

SÍNTESIS DE LA METODOLOGÍA.

La investigación realizada corresponde a un estudio de caso. En un primer momento se indagaron las principales medidas adoptadas por el gobierno de Morales en materia de nacionalización. Posteriormente se analizaron los principales elementos facilitadores y obstaculizadores, tanto a nivel internacional como regional y nacional, del proceso estatista y nacionalizador que ha venido implementando en materia de política económica el gobierno boliviano del MAS desde su llegada al poder. La metodología utilizada para realizar esta investigación se centró en el uso de dos técnicas o instrumentos de recolección de datos; revisión de fuentes secundarias y la realización de entrevistas a profundidad básicamente de tipo semi-estructurado. En lo que respecta a las fuentes primarias, se realizaron entrevistas personales semi-estructuradas en las ciudades de Bogotá, La Paz y Cochabamba durante el

mes de marzo del presente año. La información recogida en las entrevistas fue cruzada en función de un conjunto de variables de análisis establecidas previamente a la realización de las entrevistas.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN.

Hacia mediados de los noventa la crisis del denominado modelo neoliberal empieza a hacerse bastante evidente en Latinoamérica. Los síntomas del progresivo agotamiento del modelo neoliberal son varios. El florecimiento de grandes movimientos sociales abiertamente críticos de dicho modelo durante los años noventa y la llegada al poder desde finales de dicha década y principios de la siguiente de nuevas coaliciones políticas y gobiernos que pretenden generar un quiebre con las políticas de inspiración neoliberal, son dos hechos de gran trascendencia que ilustran el mencionado proceso de agotamiento (Borón, 2005).

Independientemente de qué tan retórico haya resultado el cambio en algunos casos, o de qué tanto lo esté resultando, y por supuesto salvando las diferencias ideológicas y programáticas existentes entre cada uno de los denominados ‘gobiernos alternativos’ que han venido surgiendo en Latinoamérica desde los primeros años de la presente década, los gobiernos de ‘Lula’ Da Silva en Brasil, de Kirchner en Argentina (ahora seguido por el de su esposa Cristina Fernández), de Vásquez en Uruguay, de Correa en Ecuador, de Lugo en Paraguay y el de Chávez en Venezuela –en el poder desde 1999– son algunos ejemplos que dan cuenta de la nueva tendencia político-ideológica regional dentro de la que se enmarca la victoria del MAS en Bolivia. Siguiendo a Cavanagh y Mander (2004), el continente suramericano habría sido la primera gran región del mundo en alejarse del neoliberalismo de una manera políticamente activa al haberse dado en varios de los países que lo conforman el triunfo electoral de gobiernos que ejercen resistencia, en distintos grados, al proceso de globalización económica de carácter neoliberal.

Además del levantamiento de los zapatistas en Chiapas el 1 de enero de 1994, evento que tuvo lugar en la misma fecha de la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), hechos como la crisis energética brasileña que se dio durante el segundo gobierno de Cardoso debido a su decisión de privatizar el sistema energético estatal, o la ‘muerte anunciada del experimento de reforma neoliberal más radical de los años noventa en la región’ reflejada en la detonación de la crisis argentina de finales de 2001, son ejemplos centrales para estos dos autores de la crisis del modelo neoliberal en la región.

Tanto el papel desempeñado por el gobierno brasileño bajo la batuta de Lula como el que viene desarrollando el gobierno de Hugo Chávez a nivel regional han sido muy importantes en la consolidación paulatina de un contexto caracterizado por la emergencia de propuestas alternativas al orden neoliberal. La ya aludida emergencia de distintos movimientos sociales a lo largo de toda la región también es un elemento central dentro del contexto en el que se enmarca el gobierno del MAS¹. En el caso específico de Bolivia, el denominado ‘nuevo indianismo continental’ se ha consolidado como la principal fuerza de oposición al neoliberalismo, marcando así un cambio profundo con respecto a una izquierda histórica boliviana ajena casi por completo a la cuestión multicultural (Tapia, 2005).

El desprestigio mundial de las principales IFIs que desempeñaron un papel protagónico en la implementación de medidas neoliberales es un indicativo bastante dicente del carácter del actual contexto mundial. El BM y el FMI han sido blancos desde mediados de los noventa de profundas críticas provenientes de la sociedad civil, gobiernos, ex-directivos o ex-simpatizantes ideológicos, e inclusive de una comisión bipartita del Congreso de los EE.UU.; la Comisión Meltzer.

Es muy importante tener en cuenta que la reconfiguración del orden económico internacional que se viene dando tras el acaecimiento de la crisis financiera mundial desatada en 2008, reconfiguración que se ha popularizado bajo el título de ‘nueva arquitectura financiera internacional’, es todavía un proceso en curso. No obstante, la intervención de los Estados de las naciones más poderosas del mundo con el fin de ‘salvar’ a los bancos de inversión y al sector especulador mundial es un hecho irrefutable que va en clara contravía de los presupuestos de no intervención estatal dentro de las dinámicas de mercado propios del neoliberalismo, tal como lo destacaba Socorro Ramírez en entrevista². Independientemente de que se termine consolidando o no un escenario donde las principales potencias reconozcan y acepten abiertamente la necesidad de otorgarle al Estado una mayor función reguladora y capacidad interventora en las dinámicas de mercado, al menos en materia financiera, es un hecho que tras la crisis financiera el declive del neoliberalismo se muestra cada vez más evidente.

PRINCIPALES MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO DEL MAS.

¹ Según Rodríguez G. y Barrett (2005), en Bolivia se hallan los movimientos sociales ‘más robustos y organizados de la región’. De hecho, el gobierno del MAS se autodenomina el ‘gobierno de los movimientos sociales’.

² Ramírez, Socorro (2009, 27 de febrero), entrevistada por el autor, Bogotá.

El principal proceso en materia de nacionalización que ha tenido lugar durante el gobierno de Morales es la nacionalización de los hidrocarburos. Mediante el Decreto Supremo N° 28701 emitido el 1 de mayo de 2006, el recién electo gobierno del MAS llevó a cabo formalmente lo que se considera la tercera nacionalización de los hidrocarburos en el país andino³. De acuerdo con Fernando Mayorga, el sustrato legal de la nacionalización de los hidrocarburos se encuentra en el ‘Referendo sobre el Gas’ realizado en abril de 2004, mecanismo que se había incorporado en la Constitución entonces vigente en una reforma realizada en febrero del mismo año. Tras la ‘renuncia obligada’ de Sánchez de Lozada fruto de la Guerra del Gas de 2003, la demanda generalizada de nacionalización se encaminaría institucionalmente a través de dicho referendo. A partir de los resultados del Referendo, en los que el ‘Sí’ obtuvo votaciones superiores al 85% en las tres primera preguntas, se promulga la Ley de Hidrocarburos N° 3058 el 17 de mayo de 2005, nueva ley que le brinda el marco legal necesario al gobierno de Morales para la formulación del Decreto anteriormente aludido.

Siguiendo la entrevista concedida por Roberto Fernández Terán⁴, después de la aprobación de la nueva Ley de Hidrocarburos se crearía en el mismo año un impuesto con características muy similares a las regalías petroleras; el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). A partir de dicho impuesto, las empresas petroleras transnacionales se verían obligadas a pagar al Estado un porcentaje mayor del que venían pagando. Sumado al 18% de la regalía que estaba establecida previamente, con el nuevo impuesto las empresas deben ahora pagar al Estado un 32% del excedente de su producción, lo que sumado al 18% ya existente suma un 50% y establece así una relación de 50/50 entre el Estado boliviano y las empresas.

De acuerdo con la entrevista concedida por Ivonne Farah⁵, en realidad los recursos naturales, específicamente los hidrocarburos, nunca habían dejado de estar nacionalizados en un plano jurídico desde la última vez que se decretó su nacionalización. Lo anterior no quiere decir, tal como lo resalta Fernández, que en la práctica no se hubiera dado en Bolivia desde los primeros años de implementación de medidas neoliberales, y específicamente desde 1996

³ Los dos procesos previos de nacionalización de hidrocarburos en Bolivia tuvieron lugar durante regímenes militares –1937 y 1969–. Según afirmaba en entrevista Fernando Mayorga, Director general del Centro de Estudios Superiores Universitarios (CESU) en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, en el Decreto de 2006 “[...] no se nacionaliza en un sentido ‘convencional’ ni tampoco se recoge la historia previa de Bolivia”, refiriéndose con esto a que pese a la ‘parafernalia’ del acto de nacionalización y al despliegue militar y nacionalista que lo caracterizó, nunca se ingresó realmente a las empresas, no hubo una recuperación o toma de instalaciones ni tampoco expulsión de empresas, elementos que sí estuvieron presentes en los dos casos anteriores. Mayorga, Fernando (2009, 23 de marzo), entrevistado por el autor, Cochabamba.

⁴ Fernández T., Roberto (2009, 21 de marzo), entrevistado por el autor, Cochabamba. Fernández T. actualmente se desempeña como investigador del Centro de Estudios Superiores Unversitarios de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba y también como docente de Comunicación Social de la misma Universidad.

⁵ Farah, Ivonne (2009, 23 de marzo), entrevistado por El autor, La Paz. Farah es Directora del Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES) de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), La Paz.

cuando el entonces presidente Sánchez de Lozada consumara con ímpetu medidas privatizadoras, un progresivo proceso de entrega de los hidrocarburos a las empresas privadas transnacionales. En este sentido, según Farah, la medida de la nacionalización tuvo que ver más con el control del Estado sobre los procesos vinculados con toda la cadena de producción de hidrocarburos; con la idea de que el Estado controle todos los eslabones propios de dicha industria, especialmente los de la producción del gas.

Según esta académica, la medida de nacionalización tomada en 2006 implicó, principalmente, lo que se conoce como ‘la migración de los contratos’ que tenía el Estado con las empresas petroleras extranjeras; “[...] Lo que en definitiva se ha ido aplicando ha tenido que ver con este tema de la migración de los contratos a través de los cuales lo que fundamentalmente se hizo fue modificar los términos de los impuestos con que se gravaban a las propias empresas que estaban trabajando en el país”. Lo que se ha dado es que las empresas petroleras extranjeras se han mantenido en actividades de exploración, explotación e incluso distribución, y el Estado ha ido colocando ciertas disposiciones tributarias a estas empresas. En este sentido se habría generado un tributo adicional para dichas empresas que depende de los niveles logrados en términos de producción y comercialización por cada una de éstas. De acuerdo con Farah, lo anterior refleja una contradicción con el propósito de fondo del Decreto de nacionalización de otorgar al Estado el control sobre todo el proceso productivo.

Según afirmaba en entrevista el actual Ministro de Servicios y Obras Públicas de Bolivia y ex-Ministro de Trabajo Walter Delgadillo⁶, la nacionalización es concebida por el gobierno del MAS como un medio y no como un fin. Considerando que lo que se propone el gobierno es cambiar los ‘patrones de acumulación, de hegemonía y de construcción simbólica’, el Ministro destaca la manera en que la nacionalización se encuentra en capacidad de cambiar el patrón de acumulación al darle mayor capacidad de control y participación al Estado con el fin de que éste pueda ‘dirigir y protagonizar la economía’; “[...] acumular las riquezas desde el Estado para cambiar las condiciones de vida de la gente, utilizar la acumulación en cierto sentido y organizar el mercado”. La industrialización del sector hidrocarburífero a la que el PND se supone debe aportar es concebida como un proceso central que debe ser comandado por el Estado con el fin de que éste administre de la mejor manera posible los excedentes generados en este ‘sector estratégico’ y así éstos permitan desarrollar los otros componentes del PND. A la luz de lo anterior, sería factible pensar que el ‘decreto duro’ promovido por

⁶ Delgadillo, Walter (2009, 19 de marzo), entrevistado por el autor, La Paz.

Morales en mayo de 2006 (Stefanoni, 2006) tiene el potencial de aportar a dicho cambio del patrón de acumulación.

No obstante, si se va más allá de las cláusulas contenidas en el Decreto N° 28701, la sostenida nacionalización de los hidrocarburos resulta en realidad parcial, lo que no tendría porqué sorprender si se considera que durante la coyuntura del Referendo de 2004 el MAS había adoptado una postura ‘centrista’⁷. Según Mayorga, el MAS apuntaba con este Decreto a la ‘nacionalización legal y responsable’ a la que Morales solía aludir. Para este académico boliviano, resulta acertado afirmar que al margen del discurso ‘anti-transnacionales’ que ha caracterizado a Morales, su ejercicio particular de poder ha consistido en una combinación de ‘retórica radical y medidas moderadas’. Sobre la nacionalización de los hidrocarburos Mayorga afirmó:

Lo que hay es una suerte de acuerdo con las empresas transnacionales y una modificación de los términos de la relación, sobre todo en el carácter impositivo. Yo lo resumiría con los siguientes cambios porcentuales: según la anterior Ley de Hidrocarburos [...], las empresas pagaban 18% de impuesto, con margen de que eso se incrementara (18 como base impositiva). En el decreto de nacionalización actual, *cuidando los contratos* y en base a una interpretación legal, los dos campos gasíferos más grandes que no tenían aprobación congresal de contratos son sometidos a una regla inversa: van a pagar 82% de impuestos. De recibir 18 el Estado pasa a recibir 82 en estos dos casos, y en el resto de casos donde había contratos se sube más o menos al 50% (énfasis añadido).

De acuerdo a lo manifestado por Socorro Ramírez en entrevista⁸, el tema de la nacionalización en Bolivia es más un instrumento de política interna y externa propio del actual modelo estatista del gobierno del MAS utilizado con la intención de generar márgenes de negociación con organismos internacionales y empresas transnacionales más favorables para Bolivia, lectura que de hecho explicaría la parcialidad del proceso de nacionalización previamente aludida y la que también Fernández se refiere. Para este investigador cochabambino, el tema de los contratos establecidos ente el Estado boliviano y las empresas transnacionales involucradas en la industria hidrocarburífera en el país andino resulta ser más determinante que las cláusulas formales contenidas en el Decreto de nacionalización de 2006 o que los artículos contenidos en la Nueva Constitución Política del Estado (NCPE) que versan sobre este tema.

⁷ De acuerdo con Mayorga, el MAS se ubicó entre los dos extremos del espectro político; equidistante de posturas de izquierda radical (que rechazaban el Referendo al abogar por una nacionalización radical que implicase expropiación, confiscación y expulsión de las empresas) y de los empresarios privados (que a su vez rechazaban la realización del referendo al considerar que si éste resultaba siendo aprobado se ahuyentaría la inversión extranjera). Según Santos, la nacionalización de los hidrocarburos proclamada por Morales en 2006 correspondería a una ‘nacionalización moderada’ (2006a).

⁸ Ramírez, Socorro (2009, 27 de febrero), entrevistada por el autor, Bogotá. Ramírez es una reconocida internacionalista colombiana. En la actualidad es profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI).

Siguiendo a Fernández, durante el proceso de negociación de los nuevos contratos petroleros presentados en octubre de 2006 tras la formulación del Decreto N° 28701 se generaron algunas ‘figuras’ en detrimento del alcance de la medida de nacionalización tales como la ‘devolución de las inversiones pasadas’ y la ‘devolución de los costos de recuperación’. Dicha obligación asumida por el Estado boliviano frente a las empresas es depositada en YPFB, la empresa estatal ‘revivida’ por el gobierno del MAS con el fin de que se haga cargo del negocio de los hidrocarburos en el país. De esta manera, según Fernández, YPFB resurge en la escena nacional endeudada de entrada con las petroleras, generándose en realidad una especie de subvención por parte del Estado a las compañías petroleras considerando que, por un lado, se le está quitando renta a partir de los cambios porcentuales establecidos en materia impositiva, pero por el otro, se le está devolviendo a través de dichas ‘devoluciones’⁹. Bajo esta óptica, el resultado del supuesto proceso de nacionalización de los hidrocarburos sería una figura más de asociación con las empresas petroleras en las que prima una combinación de contratos de producción compartida y de operación. Así pues, en palabras de Fernández, las características de los nuevos contratos introducen, muchas veces a manera de anexo, ‘una serie de meandros’ que generan bastante confusión, cuando no contradicción o invalidación parcial, con respecto al marco jurídico decretado por el gobierno del MAS en lo referido a la nacionalización de los hidrocarburos¹⁰. Adicionalmente, para poder cumplir con las obligaciones de ‘devolución’ adquiridas de manera generalizada en los contratos petroleros, el Estado boliviano tendría que poseer una gran capacidad de fiscalización, elemento que según Fernández carece.

Por último, es importante mencionar que además del sector hidrocarburos, ha habido otras áreas en los que el gobierno del MAS ha procurado materializar medidas de carácter nacionalizador. De acuerdo con Mayorga, en el caso de la empresa de telecomunicaciones (Entel) el Estado ha comprado casi la totalidad de las acciones y pasado así a controlar la empresa (antes bajo control de Telecom Italia). No obstante, según Farah, esta es una

⁹ Según Fernández, al hacer las ‘sumas y restas’ de lo que el Estado recibe y de lo que devuelve a las compañías a partir de estas figuras de devolución consagradas en la mayoría de los contratos, finalmente se llega de nuevo a una relación cercana a 50/50. El 82% establecido por el gobierno para el caso de los megacampos en realidad no termina aplicándose. “Bueno, recibimos un poco más de renta que en el pasado, eso es verdad, ahora recibimos como 50 o 52%, antes recibíamos 18%. Pero no basta eso para aligerar un poder petrolero transnacional. *Las empresas se están readecuando*”, (énfasis añadido). Además de la entrevista con Fernández, para una descripción detallada del tema de los contratos petroleros véase (Fernández, 2009).

¹⁰ Los contratos anteriores a la aprobación de la NCPE no se rigen por el marco legal establecido en ésta en el que explícitamente se hace alusión a la manera en que el Estado es el encargado de administrar los recursos hidrocarbúricos. El marco legal consagrado en la NCPE sólo aplica para los contratos realizados posteriormente a su aprobación, hecho que según Fernández ha sido ratificado públicamente por las autoridades del MAS. El punto aquí radica entonces en que la mayoría de los contratos realizados entre el Estado y las compañías petroleras, alrededor de 44, fueron establecidos previamente a la aprobación de la NCPE.

situación que aún no se ha resuelto y en donde el caso se encuentra en tribunales internacionales de arbitramento. Según Mayorga, en contraste, en el sector eléctrico la postura ha sido distinta; “[...] no ha habido ninguna medida en los tres años que van de gobierno ni por si acaso cercana a la nacionalización o a un incremento de la presencia del Estado en este sector”. En el caso del sector minero, que al igual que el de hidrocarburos hace parte del denominado sector estratégico de la economía, el Estado ha procurado ampliar su dominio en el marco de la producción minera. Considerando que este sector había sido nacionalizado desde la revolución de 1952, lo que el actual gobierno está haciendo, de acuerdo con Farah, es reconstituir Comibol –la empresa estatal que administra el sector de la minería– sin que esto esté implicando una profundización de la nacionalización ni un cambio en la propia ley de minería.

En definitiva, tal como lo resalta Mayorga, el gobierno de Morales demuestra una adecuación a las condiciones de cada sector y no una ‘visión ideológica de nacionalización a rajatabla’. La del sector de las telecomunicaciones vendría a ser la nacionalización más profunda pero, por tratarse de un servicio –en el que además el mercado interno ya ha llegado a su límite de crecimiento en algunos aspectos–, no se pone en juego relaciones de poder más complejas que aquellas que se disputan en el sector hidrocarburífero donde se está tratando con un recurso estratégico a nivel mundial.

CONDICIONES NACIONALES, REGIONALES Y MUNDIALES.

En primer lugar, en una perspectiva endógena e independientemente de lo moderado o parcial que efectivamente esté resultando el proceso de nacionalización adelantado por el MAS, es indudable que este proceso ha sido facilitado dado el consenso generalizado a nivel nacional que desde antes de la elección de Morales existía en el país andino con respecto a la nacionalización. Tal como lo destaca Farah, además de la “[...] conciencia unificada del movimiento social en torno a la necesidad de la nacionalización de los hidrocarburos [...], la nacionalización era algo que también era aceptado y visto como una necesidad por lo que son hoy en día las fuerzas que componen la oposición en el país”, a partir de lo cual se hace evidente que la atmósfera nacional era ‘absolutamente favorable para esta medida’. De acuerdo con Mayorga, en Bolivia sería imposible captar un mínimo de apoyo político con un discurso que abogue por que el Estado vuelva a retraerse en el plano económico; “Nacionalista no es el gobierno de Evo Morales, nacionalistas somos todos los bolivianos”. Fernández también hace hincapié en el ‘apoyo político sin precedentes’ con el que contaba Morales al

llegar al poder y en la manera en que las encuestas del momento reflejaban que más del 80% del electorado nacional, inclusive en Santa Cruz, quería la nacionalización. En este sentido, la Agenda de Octubre, vector central de las primeras directrices políticas del MAS, más que una ‘oferta electoral’ con la que el partido de Morales ha sido coherente habría equivalido a una especie de ‘agenda pública’.

Mayorga, pese a que no comparte la crítica que realiza Fernández al proceso de nacionalización de los hidrocarburos centrada en el tema de los contratos, ubica a la base de lo que denomina el ‘fracaso de YPFB después de tres años de gestión tras la nacionalización’ cuatro variables explicativas a nivel endógeno que ilustran claramente los principales obstáculos que a nivel interno ha tenido la nacionalización de los hidrocarburos: (1) La inestabilidad en los cargos superiores del sector, reflejada en la cantidad de cambios de ministros del área y presidentes de YPFB (cinco en tres años); (2) la ausencia de capacidad de gestión tanto del gobierno en el sector hidrocarburos como de YPFB, empresa que pese a que pasó de llamarse Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ‘Residual’ (la parte estatal se consideraba residual), a ser Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ‘Central’, no ha logrado aumentar su capacidad de gestión a partir del cambio de nombre¹¹; (3) la corrupción que ha salido a relucir en buena parte de la estructura de YPFB, siendo el caso del destituido presidente de YPFB Santos Ramírez el caso más reciente y ‘grotesco’; y (4) la ausencia de una estrategia encaminada a fortalecer progresivamente la empresa con el fin de permitirle estar en capacidad de irse haciendo cargo de más tareas; “[...] de repente le han dado un cúmulo de obligaciones a la empresa que debe afrontar con una estructura raquítica”. Esta última variable es análoga a lo que Fernández denomina ‘la falta de una visión política de largo plazo’.

En esta misma línea Farah afirma que el Estado boliviano no cuenta en este momento con los recursos humanos necesarios ni con la tecnología requerida para encargarse de protagonizar el desarrollo de la industria hidrocarburífera. Esta investigadora considera que la política de enfrentamiento con las empresas que a su parecer caracteriza –al menos discursivamente– al gobierno de Morales; la idea de otorgarles “[...] un rol de generación de un producto para que sea puesto en manos del Estado con el fin de que éste se encargue seguidamente de su distribución y comercialización”; y el hecho de que el Estado le haya

¹¹ De acuerdo con Mayorga, el gobierno del MAS es bastante taxativo en cuanto a rechazar tajantemente ‘todo lo vinculado al pasado’, dentro de lo que se incluye a las personas que han trabajado con las empresas, que tienen experiencia en lo que se refiere a la relación empresas – Estado y que por ende suelen estar mejor capacitadas. A lo anterior Fernández adiciona que YPFB no ha podido ‘levantarse’ porque como carece de recursos y está sumamente endeudada en razón de las obligaciones que le asignan los contratos petroleros, es incapaz de contratar personal altamente calificado al no poder pagar los sueldos que paga una petrolera.

restado recursos a las empresas a través de medidas impositivas y de esta forma les haya afectado su capacidad de inversión y de formación de recursos, ha puesto al Estado en una situación muy vulnerable. Esta situación no sólo radicaría en el relacionamiento del Estado con las empresas sino especialmente en las propias posibilidades que posee el Estado de generar las condiciones que le posibiliten hacerse cargo de la industria en cuestión. No obstante, no hay que dejar de lado el hecho de que pese al evidente debilitamiento de YPF, principal instancia encargada de hacer efectiva la nacionalización, los beneficiarios del IDH se han visto claramente favorecidos por lo que se muestra, pues, como una nacionalización parcial y con serios problemas de arrancada¹².

A nivel regional, el principal elemento facilitador del proceso estatista y nacionalizador que viene siendo adelantado por el MAS es la tendencia político-ideológica de izquierda dominante. La emergencia previa y paralela a la victoria de Morales de varios de los denominados gobiernos alternativos claramente ha generado un colchón bastante cómodo en el que el proyecto político del MAS puede descansar y moverse con relativa tranquilidad y respaldo. En esta misma línea, un elemento bastante favorable que según Farah no se supo aprovechar correctamente consistía en la postura generalizada en la región en torno a la necesidad de consolidar un marco de seguridad energética. De acuerdo con Mayorga, en un principio se había dado una aparente tensión entre Brasil y Venezuela en torno a la integración energética a nivel regional y al liderazgo que disputan Lula y Chávez, tensión que ya habría empezado a dirimirse a favor de Brasil favoreciendo así las negociaciones y la presencia de Bolivia en dicho marco. La también ya aludida inscripción de Bolivia en procesos alternativos de integración regional tales como la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y el Tratado de Comercio entre los Pueblos (TCP) evidencian la existencia de un ‘vecindario’ en el que el gobierno del MAS se siente apoyado.

Un elemento importante y tal vez menos fácil de encasillar como ‘facilitador’ u ‘obstaculizador’ consiste en la demanda energética de Uruguay, Chile, Argentina y Brasil respecto al gas boliviano, siendo estos dos últimos los principales consumidores del gas boliviano de acuerdo con el Ministro Delgado. Aunque la demanda aún es firme, ante la inestabilidad política, la ausencia de inversiones y el descenso de la producción en Bolivia, y considerando que hace años los asesores de los presidentes de la región vienen destacando el riesgo de un eventual estallido de una guerra civil en Bolivia, estos países están empezando a

¹² Las prefecturas, los municipios y las universidades públicas son los principales beneficiarios del IDH junto con las personas mayores de 60 años a quienes se les designa una parte de dicho impuesto a través de la ‘Renta Dignidad’.

buscar fuentes alternativas con el fin de cortar su dependencia del gas boliviano, lo que por supuesto implicaría un gran revés para el proyecto del MAS en caso de darse. Las recientes declaraciones de Lula con respecto a la necesidad brasileña de consolidar una ‘autosuficiencia energética’ son muy dicientes al respecto.

El gobierno del MAS ha establecido en distintas áreas relaciones estrechas y diferenciadas con los gobiernos de Venezuela, Cuba, Argentina y Brasil. En el caso de este último, además de la relación de ‘cariño y amistad’ que según Delgadillo existe entre Morales y Lula, es importante destacar que a pesar de las tensiones que se generaron a partir de la decisión de Morales de comprar las refinerías que Petrobras tenía en territorio boliviano –lo cual a la postre Lula terminaría aceptando negociar–, el gobierno brasileño ha tenido siempre, según Farah, una posición solidaria con el proceso boliviano caracterizada por una disposición constante para resolver los eventuales conflictos con miras a que Bolivia pueda seguir avanzando en su propio proceso de transformación.

En el caso de Venezuela, el Ministro Delgadillo afirma que la cooperación venezolana ha sido de vital importancia tanto en materia macroeconómica como ‘en los detalles’, refiriéndose con esto a procesos tales como la incorporación de la microempresa en el proyecto de ‘economía plural’ encabezado por el MAS. El apoyo económico que Venezuela le ha brindado al gobierno de Morales en razón de su identificada sincronía político-ideológica, apoyo por supuesto posibilitado por el margen de acción y gasto que le venían otorgando hasta hace poco los altos ingresos percibidos en materia petrolera al gobierno de Chávez, es un elemento de peso dentro del proyecto político boliviano. No obstante, es difícil determinar con detalle hasta qué punto las donaciones y los créditos otorgados por el gobierno de Chávez han incidido en los procesos de nacionalización propiamente dichos, pues, siguiendo a Fernández, la ayuda prestada por Venezuela a Bolivia no se encuentra fiscalizada por el Ministerio de Hacienda del país andino.

Pasando por último a un plano mundial, un elemento de vital importancia que posibilitó en gran medida la puesta en marcha inicial de los procesos nacionalizadores en Bolivia tiene que ver con el hecho de que el despegue de éstos haya coincidido con un aumento de los precios de los recursos energéticos en el mercado internacional (Santos, 2006a). Según Ramírez, el gobierno de Morales contó con la fortuna de coincidir en sus inicios con una bonanza económica caracterizada por el alto precio de los hidrocarburos. Este elemento es fundamental no sólo para comprender cómo el margen de acción y gasto con el que arrancó el gobierno de Morales se vio favorablemente ampliado, sino especialmente para dimensionar el obstáculo potencial que el factor precios puede representar para el proyecto nacionalizador.

De acuerdo con Ramírez, con el reciente derrumbe de los precios de los hidrocarburos la ‘capacidad técnica nacional’ de producir se convierte en un elemento central¹³. En caso de que ésta falle –caso que como ya se vio parecería ser el de Bolivia dado el estado en que se encuentra actualmente YPFB–, la alternativa sería entrar a concertar con aquellos que tienen la tecnología y capacidad de producir, es decir, con las multinacionales. Desde la perspectiva de esta académica colombiana, la capacidad de concertar nuevos términos con las multinacionales y de vincularlas con nuevas condiciones al manejo de importantes dinámicas ligadas a los recursos naturales constituye un imperativo para el gobierno del MAS. De este modo, y haciendo alusión aquí a la conversación virtual sostenida con Francisco Leal¹⁴, es evidente a partir del caso boliviano que los precios de las materias primas que exportan los países permiten explicar posibilidades mayores o menores de acción política de los gobiernos dentro de períodos coyunturales cortos.

Un segundo elemento característico del actual entorno mundial es la crisis del neoliberalismo ya aludida previamente. Lo que Mayorga denomina una ‘tendencia de más Estado y menos mercado a nivel mundial’, la progresiva pérdida de cualquier grado de Consenso por parte del CW y, desde el año pasado, las respuestas de los países más poderosos del globo a la crisis financiera internacional en las que de manera generalizada se ha vuelto a darle mayor presencia al Estado y a reconocer la importancia de su rol regulador, son elementos que han facilitado que un proceso como el boliviano esté teniendo lugar. Según este académico, el ‘retorno del Estado’ que caracteriza al actual contexto mundial y la respectiva retoma de principios keynesianos se da en unas condiciones “[...] donde ya no hay una hegemonía discursiva del neoliberalismo como construcción dominante”. El tradicional alegato del neoliberalismo contra el estatismo sobre la ineficiencia y corrupción de este último ha perdido toda legitimidad con los escándalos de corrupción que se han desatado en el seno de grandes compañías multinacionales.

A la tendencia de otorgarle un mayor papel al Estado en materia económica habría que sumarle la emergencia de nuevos poderes económicos a nivel mundial. Según Farah, pese a que muchas de las propuestas para reconstruir un nuevo orden económico mundial están viniendo de países con economías emergentes tales como las de Brasil, Rusia, India y China

¹³ Según afirmaba Ramírez en su entrevista concedida a finales de febrero de 2009, “Chávez está llamando en este momento a las multinacionales porque hasta ahora había vivido del precio alto pero no de poner a producir. Ahora le toca poner a producir porque los precios están bajos”. Considerando que tras decretar la nacionalización de los hidrocarburos Bolivia ha tenido paralizadas algunas instalaciones gasíferas debido a que carece de la capacidad técnica para ponerlas en marcha, Ramírez se pregunta: “¿Hasta dónde la nacionalización, concebida por el MAS como un indicador de desarrollo, se enfrenta con ‘dificultades técnicas insalvables’”.

¹⁴ Leal B, Francisco (2009, 18 de febrero), entrevista virtual con el autor, Bogotá-Bogotá. Leal es el fundador del IEPRI. Profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes.

(BRIC), y a pesar de la manera en que la crisis económico-financiera desatada en 2008 ha afectado a las principales potencias, las denominadas ‘potencias emergentes’ parecieran no tener aún la fuerza suficiente ‘dentro de la estructura de poderes a nivel internacional’ como para quitarle peso a las potencias tradicionalmente hegemónicas. Para esta académica, EE.UU. y los principales países europeos siguen teniendo la capacidad de definir ‘cómo y hacia dónde’ se resuelve la actual crisis.

De acuerdo con Fernández, a nivel internacional Morales también contó en principio con un apoyo sin precedentes. Según Delgadillo, las posibilidades de cooperación mutua con Europa han sido muy positivas y el posicionamiento del proyecto boliviano a nivel internacional ha sido ‘bastante bueno’. Para Mayorga, a este hecho habría que sumarle un cambio en la política exterior boliviana donde de una relación bilateral con los EE.UU. con mucha influencia norteamericana se pasó a una relación de hostilidad y se estrecharon vínculos con Cuba y Venezuela y se consolidaron otros con la India, Rusia, Irán y Libia.

En lo que se refiere a la relación con los EE.UU. es importante tener en cuenta que, tal como anota Leal, el declive progresivo de EE.UU. en el continente suramericano es un factor importante para analizar la capacidad de acción de los gobiernos de la región. De acuerdo con Delgadillo, Bolivia ha establecido una relación compleja, en muchos momentos desgastante y aún no resuelta con el país del norte. Mayorga considera que los norteamericanos han estado actuando con mesura conscientes de que ‘si se ponen en contra de Evo de manera abierta’ pueden generar que éste termine bajo el cobijo de Chávez.

RELACIÓN ENTRE EL GOBIERNO Y LAS IFIs.

Sumado a los deplorables resultados de la implementación del modelo neoliberal en la región, la actual crisis económico-financiera internacional refleja una crisis del sistema capitalista en su conjunto que hace necesario repensar el rol que las IFIs deberían desempeñar. En el caso boliviano, el proceso de movilización y lucha social que antecedió y posibilitó el ascenso de Morales se caracterizó por su confrontación directa con las empresas transnacionales y con las principales IFIs, elemento que en buena medida explicaría la manera en que éstas se han adaptado, en cierto grado, a las condiciones particulares de la Bolivia de Morales, menguándose así el condicionamiento tradicionalmente ejercido en el país bajo preceptos económicos universalistas.

Para poder entender el tipo de relación que se ha establecido entre el gobierno de Morales y las principales IFIs es fundamental tener en cuenta que además de los altos precios del gas

que acompañaron el inicio del gobierno del MAS existía una coyuntura económica bastante favorable para éste; la demanda del gas boliviano se incrementó, se redujo la deuda externa, las remesas provenientes del exterior estaban dinamizando la economía, la balanza comercial era favorable y, en contraste con los años precedentes, no había déficit. Este último elemento es vital en la medida que implica que no se necesiten préstamos y que por ende se pueda prescindir de los fondos de las IFIs dada una capacidad económica real sin la cual difícilmente la ideología podría encontrar asidero. De acuerdo con Delgadillo, durante los tres últimos años Bolivia ha tenido sucesivamente superávit, lo que le ha dado la posibilidad de cubrir tanto el gasto corriente como la inversión y le ha permitido asumir una posición ‘muy vigorosa y de dignidad’ frente a las IFIs.

Previamente a la victoria del MAS las IFIs desempeñaban un papel protagónico en la definición de las políticas económicas en Bolivia. Según Farah, antes del gobierno de Morales la injerencia de las IFIs era bastante fuerte –afirmando de hecho que las políticas económicas eran definidas desde estos organismos– y la actitud predominante en las autoridades bolivianas era de sometimiento. En términos del Ministro Delgadillo, “[...] Antes de este boom económico [el que le ha tocado vivir al gobierno del MAS] la relación con los organismos multilaterales era de sujeción porque este gobierno, este país, era permanentemente deficitario y por ende tenía que ir al mundo, especialmente al Imperio, a pedirle limosna hasta para sus gastos corrientes”. Mayorga destaca a este respecto que la coyuntura de déficit permanente existente en el país andino antes de la victoria del MAS y la derivada dependencia que tenía Bolivia de los préstamos explican porqué las políticas económicas bolivianas eran negociadas con misiones del FMI y del BM.

Fernández estudia en detalle la relación entre el FMI, el BM y el Estado boliviano en su libro *FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia* de 2003. En éste el investigador boliviano demuestra con datos del propio BM la manera en que una gran parte del programa de inversión pública boliviano se discutía en las oficinas del BM en Washington y cómo cerca del 51% de los ingresos del Estado provenían de donaciones y créditos condicionales otorgados en principal medida por las IFIs. Según comentaba Fernández en entrevista, previamente a la victoria del MAS existía “[...] una situación de subordinación casi total al BM, al BID, al Consenso de Washington [...] y eso es lo que ha cambiado con este gobierno”.

Tras la victoria del MAS las relaciones entre Bolivia y las IFIs sufrieron un cambio sustancial. Siguiendo a Mayorga, el BM y el FMI empezaron a abrirse al discurso del gobierno del MAS desde un principio, hecho que se vería reflejado en la reunión que tuvo

lugar a principios del nuevo periodo presidencial entre altos mandos del FMI y algunos ministros bolivianos con el fin de discutir la ‘otra’ concepción de desarrollo que traía el nuevo gobierno¹⁵. De acuerdo con Fernández, era tan poderosa la fuerza social interna de apoyo al MAS que a principios de 2006 el propio BM decidió condonar, sin que el gobierno hiciera ningún trámite, cerca de 800 millones de dólares de la deuda externa boliviana. De igual forma, el BID haría lo propio condonando alrededor de 1200 millones de dólares al principio del gobierno del MAS sin que éste ejerciera mediación directa. Fernández considera que debido al debilitamiento del BM y el FMI en razón del rotundo fracaso de sus políticas de corte neoliberal en Bolivia y a la ‘conciencia colectiva’ generalizada en varios sectores nacionales alrededor de la necesidad de la nacionalización, estas IFIs carecían de entrada de un margen de acción que les hubiera permitido ejercer resistencia alguna frente a las medidas que empezó a implementar el gobierno de Morales desde un principio. Según Farah, las IFIs son conscientes de que ya no pueden actuar desde las posiciones de fuerza que tenían antes.

El Ministro Delgado, por su parte, afirma que las relaciones entre las IFIs y el gobierno boliviano no se han terminado, sino que sencillamente ahora es el gobierno quien pone las condiciones, siendo ilustrativa de esta concepción oficial la consigna utilizada por Morales: ‘socios pero no patrones’. En este sentido siguen habiendo programas con el BM o con el BID pero bajo las normas del gobierno y enmarcados dentro del PND del gobierno de Morales. Según el Ministro, “[...] La gente de los organismos multilaterales que está en Bolivia ha entendido el proceso y han comprendido que si no se ponen bajo la onda del gobierno no va a haber buenas relaciones. En general se han portado bien”. Mayorga destaca en esta misma línea que no se ha tratado de un rechazo a los organismos multilaterales, lo cual se puede ver reflejado en las buenas relaciones que se tienen con la CAF.

Ya para cerrar, es importante resaltar que, de acuerdo con Farah, el gobierno ha desarrollado capacidad para dialogar con las IFIs ‘de igual a igual’, logrando así zafarse de las orientaciones que solían ‘proponer’ estos organismos. Sin embargo, esta académica resalta con énfasis que el gobierno no está en capacidad de romper sus vínculos con las IFIs ni de dejar de lado los recursos que necesita y que provienen de éstas, fundamentalmente del BM y del BID¹⁶. Esta investigadora considera que el país no va a tener ninguna posibilidad de prescindir de las IFIs y de otro tipo de cooperación porque de hacerlo todo su PND se desvanecería dada la actual caída de los precios de los recursos naturales en el mercado

¹⁵ De acuerdo con Mayorga, el hecho de que la propia oposición afirme que ‘antes se dependía de las IFIs y ahora de Chávez’ refleja la carencia de injerencia que poseen actualmente estos organismos en Bolivia.

¹⁶ A este respecto Farah hace alusión a recientes declaraciones del nuevo presidente de YPFB en las que habla de acercamientos con el BM y el BID con el fin de conseguir recursos.

internacional y teniendo en cuenta que dicho plan se basa justamente en los excedentes del denominado sector estratégico de la economía. Lo significativo del ‘viraje’ que se ha dado desde la llegada de Morales a la presidencia en términos de las relaciones con las IFIs consiste, para Farah, en que se ha demostrado que es posible vincularse con estos organismos en términos de igualdad y desde una postura soberana con el fin de negociar los términos en que estos organismos otorgan recursos.

CONCLUSIONES.

A partir del análisis expuesto en el capítulo anterior es posible afirmar que el gobierno de Morales contó desde sus inicios con unos contextos nacional, regional y mundial bastante favorables para la puesta en marcha de su proyecto estatista y de medidas tendientes a generar procesos de nacionalización.

En un plano nacional, desde antes de la elección de Morales existía un consenso generalizado a favor de la nacionalización de los hidrocarburos y una coyuntura económica bastante favorable caracterizada por la ausencia de déficit. A nivel regional la tendencia político-ideológica dominante, caracterizada por la emergencia de los denominados gobiernos alternativos y por el fortalecimiento de una nueva izquierda latinoamericana, claramente facilitó desde un principio las cosas para el gobierno del MAS. La posición solidara y de respaldo por parte del gobierno brasilero, por un lado, y la ayuda económica brindada por el gobierno venezolano, por el otro, han sido elementos de peso. En un contexto mundial, la coincidencia de la victoria de Morales con altos precios de los recursos energéticos en el mercado internacional fue posiblemente el elemento de mayor peso. La crisis del neoliberalismo y el protagonismo recuperado progresivamente por el Estado en materia económica se han constituido también en elementos facilitadores del actual proyecto político-económico boliviano. La emergencia de nuevos poderes económicos a nivel mundial (como lo son los denominados BRIC) y el respectivo reto que dicho fenómeno ha implicado para el mantenimiento del predominio mundial de los EE.UU. en materia económica son características igualmente relevantes. El generalizado apoyo internacional con el que contó el presidente Morales desde un principio y el progresivo declive del poderío estadounidense en Suramérica habrían sido también elementos centrales.

No obstante, pese a dicha favorabilidad generalizada el gobierno de Morales se ha topado con un conjunto de factores que han obstaculizado y complejizado la materialización de los procesos nacionalizadores y estatistas que en materia económica pretende realizar, factores

que en algunos casos pueden ser atribuibles a la manera en que el propio gobierno ha encarado dichos procesos.

A nivel nacional, la inestabilidad en los cargos superiores del sector hidrocarburífero; la ausencia de capacidad de gestión y de capacidad técnica en el sector hidrocarburos que caracteriza al gobierno y específicamente a YPF (la carencia de recursos humanos y tecnológicos requeridos para hacerse cargo del desarrollo de la industria hidrocarburífera); la corrupción; y la ausencia de una estrategia encaminada a fortalecer a YPF con el fin de permitirle estar en capacidad de hacerse cargo progresivamente de más tareas, son los principales elementos que se han erigido como barreras. En la dimensión regional, el hecho de que la demanda del gas boliviano esté viéndose amenazada por la búsqueda de autosuficiencia energética o de fuentes de energía alternativa por parte de los principales países importadores de dicho recurso se muestra como el principal obstáculo potencial para la profundización del proyecto político-económico del MAS. Por último, en una perspectiva mundial, el reciente derrumbe de los precios de los hidrocarburos parece ser la principal limitación con la que desde ya está teniendo que lidiar el gobierno boliviano.

En este sentido, considerando que el favorable entorno económico que acompañó el inicio del gobierno del MAS ha venido transformándose, la pregunta por el futuro de la relación entre el gobierno boliviano y las principales IFIs se torna primordial. Antes de la llegada de Morales a la presidencia estos organismos desempeñaban un papel protagónico en la definición de las políticas económicas en Bolivia y poseían un alto grado de injerencia en el país andino. La coyuntura de déficit permanente existente en el país andino antes de la victoria del MAS y la derivada dependencia que tenía Bolivia de los préstamos eran factores centrales en la explicación de porqué las políticas económicas bolivianas eran ‘negociadas’ con las IFIs. Inmediatamente después de la victoria electoral del MAS buena parte de estos organismo empezaron a abrirse al discurso del nuevo gobierno debido a que dada su debilidad y desprestigio, éstos carecían de entrada de un margen de acción que les hubiera permitido ejercer resistencia alguna frente a las medidas que empezó a implementar el gobierno de Morales.

Parece ser cierto que el gobierno ha desarrollado capacidad para dialogar con las IFIs en una posición muy distinta a la de tradicional subordinación. No obstante, si se tiene en cuenta la reciente caída de los precios de los recursos energéticos en el mercado internacional y las serias dificultades que enfrenta el gobierno boliviano a nivel nacional para hacerse cargo de la industria hidrocarburífera de manera eficiente y con posibilidades de sustentar a largo plazo en ésta su proyecto de país, parecería iluso pensar que el gobierno está en capacidad de

romper sus vínculos con las IFIs, las compañías petroleras transnacionales y con los capitales externos en general; de dejar de lado los recursos y la capacidad técnica que necesita y que por lo visto sólo parecerían poder provenir de estas instancias¹⁷. En este sentido, una luz verde que según el Ministro Delgadillo se vislumbra en el camino como sustituto potencial de los hidrocarburos y del rol central desempeñado por éstos dentro del proyecto de país que pretende materializar el actual gobierno es el litio. De acuerdo con Delgadillo, posiblemente dentro de poco el litio entrará a reemplazar el papel que ahora desempeñan los hidrocarburos, de la misma manera que en su momento éstos sustituyeron el rol estratégico que cumplía el estaño dentro del país andino.

Considerando que la intención de este último capítulo no es llegar a conclusiones de carácter perentorio sino, por el contrario, recapitular los principales resultados obtenidos en este ejercicio investigativo para así poder sintetizar la particular complejidad del caso boliviano en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de su proyecto estatista, es importante preguntarse aquí por el tipo de futuro que parecería esperarle a países que, como Bolivia, fundan su visión de desarrollo en la explotación de los recursos naturales no renovables. Independientemente de quién se encargue de dicha explotación y de cómo sean utilizados los recursos económicos obtenidos a partir de la misma, la sostenibilidad de este tipo de proyectos de desarrollo es un elemento a tener en cuenta tanto por el irremediable desgaste ambiental que éstos suelen implicar como por la duración natural que pueden tener. En este sentido, el énfasis puesto por Delgadillo en los recursos agroindustriales y en la generación de una industria agroecológica como potencial sustituto del vector hidrocarburos parecería plantear una alternativa a la dependencia de Bolivia de los recursos naturales no renovables.

A la hora de pensar en el proceso político que actualmente está en marcha en el país andino, independientemente de qué aspecto/s de éste se decida/n iluminar, es clave tener en cuenta que el debate entre estatismo y libre mercado se enmarca en últimas en una discusión alrededor del capitalismo contemporáneo y dentro de la tensión existente y cada vez más evidente entre ‘mercado y democracia’. De un mismo modo, la discusión sobre los modelos económicos se inscribe en una discusión más profunda alrededor del tema del desarrollo. En este sentido, si se tiene presente que las bases ontológicas y filosóficas sobre las cuales se

¹⁷ “Los cálculos iniciales de inversión del gobierno para el 2009 tendrán que ser ajustados, va a tener que ser menor el monto [...] Hasta hace poco el gobierno pensaba que podría cubrir el déficit que tenía con endeudamiento externo pero aparentemente eso también está complicado, hay que ver de dónde se ajusta [...] En el 2010 va a ser más problemático: se irán agotando las reservas, el superávit se convertirá en déficit y las posibilidades de inversión del gobierno se van a disminuir”. (Delgadillo, 2009).

sustenta el proceso boliviano y su visión particular de desarrollo –dentro de las cuales se pretende que el legado aimara alrededor de la organización comunitaria de la sociedad en sus distintos ámbitos juegue un rol central– son totalmente opuestas a los principios filosóficos y ontológicos sobre los cuales se fundamentó el credo neoliberal –que apuntan a destacar la naturaleza egoísta e individualista del ser humano–, resulta bastante complicado imaginar de qué manera el ‘capitalismo andino-amazónico’ que según García L. se está construyendo en Bolivia, y que como se vio pretende hacerlo ‘en diálogo con el mundo globalizado’, logrará consolidarse en medio de las tensiones teóricas y prácticas inherentes a su propuesta misma. Bajo esta lógica, depender de un recurso como los hidrocarburos que se halla inmerso en una dinámica mundial de mercado con características claramente capitalistas para lograr llevar a delante el proyecto de construir una sociedad tendiente a superar el capitalismo y acercarse a largo plazo a un modelo socialista se muestra como una tarea hartamente compleja.

Por un lado, el gobierno boliviano parece tener la necesidad de entrar a negociar los términos de su relación con las principales IFIs y de ‘asociarse’ de alguna forma con las compañías privadas transnacionales, tal como ha venido ocurriendo durante el gobierno del MAS. Por el otro, dicho proceso aparentemente ineludible acarrea el riesgo de subordinar de nuevo al Estado boliviano, específicamente a YPF, a la lógica del orden transnacional petrolero. Así pues, la ‘nacionalización parcial’ que estaría teniendo lugar actualmente en Bolivia a la luz de la investigación aquí plasmada se encuentra en un complejo punto medio que está demandando necesarios cambios si de lo que se trata es de que el actual proyecto político boliviano siga siendo posible, pero que a su vez no tiene un extremo claro al cual dirigirse sin que haya de por medio serios riesgos.

El caso abordado en este trabajo refleja con nitidez que la capacidad de generar procesos de transformación a nivel económico, social, y político en una sociedad que sean sostenibles más allá del corto plazo va mucho más allá de la simple voluntad política y convicción ideológica, aunque claramente éstas últimas suelen ser el motor de dicho tipo de procesos. La Bolivia de Morales demuestra, pues, cómo en la actualidad los planeamientos teóricos que apuntan a resaltar la erosión de los Estados-nación y su pérdida de poder dado el particular contexto de globalización que está teniendo lugar se muestran obsoletos para leer el momento actual por el que pasan las relaciones económico-políticas de poder a nivel mundial. Sobra decir a estas alturas que si el Estado boliviano es en la actualidad un ejemplo de esto es debido en buena medida a la conjunción de una serie de variables sobre la mayoría de las cuales el poder que éste está en capacidad de ejercer carece de capacidad de incidencia o control.

BIBLIOGRAFÍA.

- Borón, Atilio A. (2005), “La izquierda latinoamericana a comienzos del siglo XXI: promesas y desafíos”, en Rodríguez, C.; Barrett, P. y Chávez, D. (eds.) *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.
- Cavanagh, J. y Mander, J. (eds.), (2004), *Alternatives to economic globalization: a better world is possible*, San Francisco, Berret-Koehler Publishers Inc.
- Cuba R., L. Pablo (2006 enero – abril), “Bolivia: movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente”, en *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Buenos Aires, CLACSO, Año VII, Número 19, pp. 55 – 64.
- Delgadillo, Walter (2009, 19 de marzo), entrevistado por El autor, La Paz.
- Farah, Ivonne (2009, 23 de marzo), entrevistado por El autor, La Paz.
- Fernández T., Roberto (2003), *FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial. Poder supranacional en Bolivia*, La Paz, Plural Editores.
- Fernández T., Roberto (2009), *Gas, petróleo e imperialismo en Bolivia*, La Paz, Plural Editores.
- Fernández T., Roberto (2009, 21 de marzo), entrevistado por El autor, Cochabamba.
- García L., Álvaro (2006, enero – abril), “El evismo: lo nacional-popular en acción” en *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Buenos Aires, CLACSO, Año VII, Número 19, pp. 25 - 32.
- “La nueva Constitución de Bolivia: evitar una confrontación violenta” (2007, 31 de agosto), en *International Crisis Group (ICG)*, Bogotá–Bruselas, Informe sobre América Latina N°23.
- “Las divisiones en Bolivia: ¿demasiado hondas para superarlas?” (2004, 6 de julio), en *International Crisis Group (ICG)*, Quito–Bruselas, Informe sobre América Latina N°7.
- Leal B, Francisco (2009, 18 de febrero), entrevista virtual con El autor, Bogotá.
- Mayorga, Fernando (2009, 23 de marzo), entrevistado por El autor, Cochabamba.
- Ramírez, Socorro (2009, 27 de febrero), entrevistada por El autor, Bogotá.

- “Reformas en Bolivia: riesgo de nuevos conflictos” (2007, 8 de enero), en *International Crisis Group (ICG)*, Bogotá–Bruselas, Boletín informativo de Latinoamérica N°13.
- Rodríguez Garavito, César A. y Barrett, Patrick S. (2005), “¿La utopía revivida? Introducción al estudio de la nueva izquierda latinoamericana”, en Rodríguez, C.; Barrett, P. y Chávez, D. (eds.) *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.
- Stefanoni, Pablo (2006 enero- abril), “El nacionalismo indígena en el poder”, en *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Buenos Aires, CLACSO, Año VII, Número 19, pp. 37 – 44.
- Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (2007a, septiembre), “Entrevista a Álvaro García Linera ‘Evo simboliza el quiebre de un imaginario restringido a la subalternidad de los indígenas’” en *Revista del Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, Buenos Aires, CLACSO, Año VIII, Número 22, pp. 143 - 164.
- Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo (comps.) (2007b), *Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos sociales*, Buenos Aires, El Colectivo - Clacso.
- Tapia, Luis (2005), “Izquierda y movimiento social en Bolivia”, en Rodríguez, C.; Barrett, P. y Chávez, D. (eds.) *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura*, Bogotá, Grupo Editorial Norma.